



Mariela Cuadro

Área Estados Unidos

### **Acerca del intento de golpe de Estado en Ecuador.**

Etimológicamente, “democracia” quiere decir el “gobierno del pueblo”. En nuestro idioma, esta última frase puede tener dos significados bien distintos, pues “el pueblo” puede aparecer como sujeto o como objeto de gobierno. Más allá de la pluralidad de sentidos que puede atribuírsele a este término (el pueblo será representado por distintos grupos de sujetos según quién hable), está claro que, en el primer caso, éste gobernará, mientras que, en el segundo, será gobernado, inyectándosele de esta forma actividad o pasividad al núcleo de la democracia.

Si bien la historia de América Latina no es monolítica, pues cada Estado tiene su particularidad, sí puede decirse que los países que la conforman atravesaron momentos similares a partir de los cuales puede hablarse de una historia política común del continente sudamericano. Efectivamente, luego de años de dictaduras encabezadas por militares, -pero (no debemos olvidarlo) apoyadas y alentadas por sectores civiles-, luego de años de prácticas de terrorismo de Estado, la democracia se impuso en toda la región. Con sus fortalezas y debilidades, con las imperfecciones propias de este sistema político (Derrida sostiene que la democracia es siempre un porvenir), los gobiernos democráticos permitieron la paulatina emergencia de perspectivas críticas corporizadas en movimientos sociales.

Las últimas dictaduras dejaron tras de sí la implantación de un modelo neoliberal que, Consenso de Washington de por medio, supuso una apertura total de las economías latinoamericanas. Este modelo -versión actualizada del liberalismo decimonónico- fue acompañado por teorías del derrame según las cuales la sobreabundante riqueza recaería más tarde o más temprano sobre los sectores menos favorecidos y por la omnipresente “mano invisible” del mercado que sería la encargada de realizar una distribución equitativa. Sus resultados en América Latina fueron feroces: Nuestras economías, imposibilitadas de competir en el

mercado internacional, comenzaron un proceso de desindustrialización que no sólo implicó la destrucción de las estructuras productivas nacionales, sino también la disminución de la participación de las clases trabajadoras en el ingreso nacional. El “pueblo”, así, fue objeto de gobiernos autoritarios y democráticos (también latinoamericanos) que, subidos al por entonces único tren de la historia, optaron por retirar al Estado, destruyeron las industrias nacionales y los lazos sociales y dejaron tras de sí una miríada de individuos aislados y empobrecidos.

Los pueblos, sin embargo, y frente a lo que muchos postulan, no son objetos pasivos ni masas manipulables. Al contrario. Y esto lo demostraron a través de las sucesivas revueltas, insurrecciones y levantamientos populares en contra del modelo neoliberal que tuvieron lugar a lo largo y a lo ancho de América Latina en los primeros años del siglo XXI. Los pueblos de Argentina, Bolivia, Ecuador, entre otros, fueron protagonistas de importantes levantamientos que derrocaron gobiernos y plantearon exigencias a aquellos que se proponían conducir el país. Allí se demostró qué significa la democracia, presentándose las clases populares como activos sujetos de gobierno. Quienes a partir de entonces fueron elegidos democráticamente para ponerse al mando de los distintos países de Latinoamérica, constituyeron la institucionalización de estos procesos. Como toda institucionalización, su función fue fijar el movimiento y, por lo tanto, éste perdió radicalidad. Sin embargo, en mayor o en menor medida, muchos de estos gobiernos comenzaron a alejarse del modelo neoliberal, a transitar caminos distintos a aquél que estaba prefijado por quienes anunciaban el “fin de la historia”, festejando el fin de las resistencias.

Y comenzaron a emerger entonces nuevas oposiciones que, encaramadas sobre partidos políticos y medios de comunicación, primero sutilmente y luego no tanto, pusieron en evidencia que había algo en juego que realmente les interesaba. La democracia, en tanto significante, se convirtió entonces en un objeto de lucha, es decir, comenzó una batalla por su significado: si democracia quiere decir distribución de la riqueza, si quiere decir justicia (y qué tipo de justicia), si quiere decir libertad de expresión (y qué tipo de libertad de expresión), si quiere decir seguridad, si quiere decir individualidad o individualismo, etc. Pero actuar en nombre de la democracia no quiere decir de manera necesaria actuar democráticamente: Allí está la administración Bush invadiendo países en nombre de ella (la imposición de la democracia es un contrasentido). Ya en *La paz perpetua* Kant nos hablaba de la diferencia entre un político moral y el moralismo político.

El 30 de septiembre hubo un intento de golpe de Estado en Ecuador. Que ciertos medios nacionales lo hayan caratulado como una “rebelión” no debería llamarnos la atención en este contexto, pero sí debería ser objeto de repudio generalizado, pues el discurso no es inocente, sino que construye realidad. “Practicar la crítica”, sostenía Michel Foucault, “es una cuestión de hacer gestos fáciles difíciles”. La intención estuvo resguardada

tras el argumento de una reivindicación salarial por parte de sectores de la policía nacional ecuatoriana. Como sostuvo el presidente Rafael Correa en su discurso luego de ser repuesto en el mando, este argumento es poco creíble: ¿Una reivindicación salarial puede tener como objetivo o resultado el derrocamiento de un gobierno elegido democráticamente?

En esta oportunidad este movimiento no pasó de la intención, pues fue sofocado por sectores de la misma policía nacional y del ejército ecuatoriano que se presentaron como defensores de la voluntad del pueblo. Es importante resaltar también la movilización popular que buscó defender al presidente. Vale destacar, por otra parte, la actuación de la Unasur que se reunió de urgencia en Buenos Aires y que en el documento final no dudó en llamar a lo sucedido en Ecuador como golpe de Estado, estableció una serie de medidas concretas ante posibles futuros casos de derrocamiento de gobiernos elegidos por el pueblo y aseguró que en la próxima Cumbre Ordinaria de Jefes y Jefas de Estado se adoptará un protocolo adicional al Tratado Constitutivo del organismo que establezca la cláusula democrática.

Sin embargo, el hecho es de una extrema gravedad y pone en evidencia que la impunidad con la que se desarrolló el golpe de Estado contra el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, sentó un lastimoso precedente en América Latina. Esta impunidad estuvo graficada por el reconocimiento de cincuenta países (entre ellos, Estados Unidos, Chile, México, Colombia) del nuevo gobierno hondureño encabezado por Porfirio Lobo.

La democracia es el gobierno del pueblo y éste debería gobernar para sí mismo, a riesgo de, en caso contrario, convertirse en un mero objeto, espectador de la política y no partícipe de ésta.